

“Un conflicto puede ocultar otro” Llanura costera de Veracruz*

Odile Hoffmann**

David Skerritt***

El término “modernización” aparece ya en el discurso político mexicano en los primeros años que siguieron a la Independencia, a principios del siglo XIX. Hoy, se encuentra de nuevo en el centro del debate nacional. La administración de Carlos Salinas de Gortari, presidente de la República electo en 1988, ha lanzado un amplio proyecto llamado “de modernización”, orientado simultáneamente al frente económico y al político. La idea básica es aumentar la competitividad y la productividad nacional en todos los sectores, con miras a una integración de México a los acuerdos del GATT. Entre otras cosas, esto implica reducción del aparato burocrático y su retiro progresivo de las estructuras productivas, donde ha estado presente desde los años setenta. Ha llegado la hora de pensar en costos y precios y de reducir los subsidios y apoyos (tanto para la producción como para la comercialización o el consumo), así como de generalizar y uniformizar el régimen fiscal para todos los productores. Estas medidas van acompañadas de otras, más directamente políticas, a nivel electoral y del funcionamiento de las instancias regionales y nacionales. En el primer caso se trata de ampliar la participación en las elecciones a los demás partidos fuera del partido oficial (PRI, Partido Revolucionario Institucional); en el segundo, el Estado busca el surgimiento de nuevos interlocutores políticos capaces de sustituir las estructuras de tipo clientelista o caciquista que pretende combatir (véase G. Gordillo 1990).

* Coloquio internacional, Tolosa 13-14 de diciembre de 1990 *Agriculture et paysanneries en Amérique Latine. Mutations et recompositions*

** ORSTOM-CREDAL.

***Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad Veracruzana-ORSTOM.

En esta ponencia se tratará, a través de un ejemplo localizado y muy parcial, de hacer una interpretación de las modalidades y consecuencias de estas recomposiciones políticas y económico-productivas, destacando el carácter muy reciente de esta recomposición.

La región del Golfo de México, y en especial la del centro del estado de Veracruz que guarda una amplia gama de las principales producciones “tropicales” (caña de azúcar, café, petróleo, ganadería), ofrece estremecedores ejemplos de los actuales cambios (véase CREDAL 1990).

En el sector azucarero, muy controlado por el Estado desde los años cuarenta, la venta de los ingenios y su privatización se inició en 1988 para después acelerarse recientemente.

El organismo paraestatal del sector del café, el INMECAFE (Instituto Mexicano del Café), había logrado, desde los años setenta, impulsar la creación de un grupo de pequeños y medianos productores, con política voluntarista de precios de garantía y de ayuda para la comercialización. El debilitamiento de esta institución, en un contexto de crisis provocada por la ruptura de los acuerdos de la OIC (Organización Internacional del Café) en julio de 1989, remitió a los productores a los únicos interlocutores, los del mercado privado, y a los azares de los precios del mercado mundial.

Finalmente, un sector importante en el mundo rural (aunque no agrícola), el de la extracción, el refinamiento y la exportación del petróleo, cuenta con una fuerte presencia en el norte de la zona considerada. Ante la organización sindical de Pemex, (Petróleos Mexicanos, nacionalizado en 1938) particularmente poderosa, el Estado optó por el enfrentamiento, con el arresto del principal líder, La Quina, acusado de acopio ilegal de armas (véase

M.-F. Prévôt-Schapira 1989). Así, daba a conocer claramente sus intenciones de cambiar ciertas "reglas", sobre todo en las relaciones obreros/sindicatos/patrón (Estado) y en los contratos colectivos de trabajo.

De este modo, los primeros pasos hacia la modernización se traducen, en la región del Golfo, en un cuestionamiento de los equilibrios económico-políticos anteriores y de los principales grupos de poder locales vinculados con los grandes sectores productivos más o menos controlados por el Estado.

La política y el mensaje del Estado ante el sector privado resultan menos claros. Oficialmente, este último es el gran privilegiado de esta modernización y es presentado como el futuro del país, como la solución ante los problemas de burocratización de los organismos relacionados con la producción etc. En la realidad, el Gobierno se muestra más cauto, consciente del enorme poder de algunos grupos de empresarios, sobre todo en el norte del país, pero también, a menor escala, en la mayoría de las regiones.

El sector agrícola privado en el centro de Veracruz: ¿Adhesión o resistencia al esquema de modernización?

En la región central de la llanura costera de Veracruz, un grupo importante de empresarios privados mantiene, desde hace un siglo, un lugar preponderante en el control de la producción agrícola regional: el de los ganaderos, productores de plátanos, y hoy de cítricos, y grandes terratenientes.

Elevan sus voces a través de múltiples canales, entre ellos:

- Las Asociaciones de Productores; asociaciones ganaderas a nivel local (ALG) y regional (Uniones del Centro —UGC— y del Norte —UGN— del estado de Veracruz). Asociación de Productores Plataneros.
- Los puestos de elección (puestos municipales, diputados nacionales y estatales).
- Las relaciones personales y familiares establecidas por muchos de ellos con los altos funcionarios del Estado.

Siguiendo con interés, mezclado de ansiedad, los avances de Carlos Salinas de Gortari en su proyecto de modernización, estos ganaderos se levantaron firmemente contra ciertas medidas, sobre todo la reforma fiscal que prevé gravar a los productores de acuerdo con el volumen de ventas declarado: hasta

ahora se gravaban únicamente las transacciones y los movimientos de ganado. Otros motivos alimentan la ola de descontento, éstos más relacionados con las condiciones coyunturales desfavorables de la producción: las crudas heladas de 1989 afectaron seriamente las reservas y la capacidad forrajera del año en curso; la exportación de cítricos a los Estados Unidos se redujo por los problemas fitosanitarios; y el mercado interno de la carne se derrumbó por una notable baja en el consumo. Los ganaderos exigen ayuda del Estado, en particular a través de la ampliación del derecho de exportación de ganado a Estados Unidos (hasta ahora sometido a estrictas cuotas para el estado de Veracruz) y una flexibilización de las condiciones de comercialización interna, todavía controlada por un grupo restringido de intermediarios.

Entre el grupo de ganaderos y el Estado, las tensiones van en aumento: las alianzas políticas tradicionales están en peligro, como por ejemplo la afiliación sistemática de los ganaderos al partido oficial (PRI), o el apoyo de las asociaciones de productores a los candidatos oficiales en las elecciones. Algunos coquetean con el PAN; otros están todavía indecisos pero no titubean en dar a conocer su descontento por otras vías, por medio de la prensa o individualmente. Por su parte, desde 1987 y con la llegada a la gubernatura del estado de Veracruz de Fernando Gutiérrez Barrios (ahora Secretario de Gobernación), el Estado ha multiplicado los signos de desacuerdo y su voluntad de acabar con ciertos sectores privados, en especial el de los ganaderos, muy comprometidos en asuntos de caciquismo y de tráfico de armas (hablando sólo de las objeciones oficiales). Así fue como un gran cacique ganadero del sur del estado, Cirilo Vázquez Lagunes, conocido desde hace muchos años por sus atropellos, fue detenido en 1987 a pesar de contar con poderosos apoyos institucionales.

El análisis detallado de la situación local¹ durante el primer semestre de 1990, da una serie de "pistas" o de hipótesis para elucidar las complejas y cambiantes relaciones entre el Estado y este grupo de presión: ¿Cuáles son los argumentos empleados? ¿Con qué ventajas cuentan unos y otros? ¿Qué fuerzas sociales o políticas están implicadas en las negociaciones?

1 Información obtenida del banco de datos de la prensa local y nacional acerca de Veracruz, "SIV-Veracruz", 1989-1990, establecido por el CEA (Centro de Estudios Agrarios, Jalapa).

Un conflicto puede ocultar otro: relato de un enfrentamiento

A principios de mayo de 1990, un grupo de campesinos pertenecientes al "Movimiento de los 400 Pueblos" invadió tierras ganaderas de "La Soledad" en el municipio de Atzalán. La policía intervino inmediatamente para expulsar a los campesinos y en la acción murieron cuatro personas, entre ellas unos policías.

Es de observar la rapidez y la violencia de la reacción de las autoridades ante esta invasión: la expulsión se realizó antes de cualquier intento de diálogo, y sin que hubiera enfrentamientos entre los campesinos y el propietario. El Estado quiso ante todo mostrar su determinación de luchar contra cualquier forma ilegal de ocupación de tierras² y su negativa "categórica" de negociación fuera del marco legal. Sólo después se encontró una "solución política" con la concesión de tierras a los campesinos solicitantes y el no encarcelamiento a los dirigentes del "Movimiento de los 400 Pueblos".

De esta forma, el Gobierno se enfrentó en forma brutal a César del Angel, líder del Movimiento, personalidad compleja y de primer plano en las luchas agrarias del estado de Veracruz desde los años sesenta. El momento seleccionado para la invasión de tierras, en 1990, corresponde a un período de "imprecisión política" de César del Angel, mal repuesto de su efímera alianza con la oposición cardenista en 1988 y sin orientación política clara desde entonces.

Casi al mismo tiempo se reanuda un antiguo conflicto agrario en el municipio vecino de Martínez de la Torre, alrededor de los pueblos de San Rafael y de Jicaltepec, que también hace salir a escena a ganaderos y campesinos solicitantes de tierras.

Después de los primeros repartos de los años 1936 y 1972, vinieron nuevas solicitudes de dotaciones agrarias a principios de los años ochenta, presentadas por campesinos relacionados con el "Movimiento de los 400 Pueblos". En esa época, César del Angel (su líder) estaba de "luna de miel" con las autoridades tras haberse afiliado al sindicato oficial, la CNC. Su poder no bastó para arreglar este asunto agrario y rápidamente se retiró del caso.

Aparece entonces otro grupo en 1983, "Antorcha

Campesina". La salida a escena de este grupo en las costas de Veracruz significó una doble expansión, geográfica y política, de este movimiento hasta el momento activo en el centro del estado de Puebla, y el inicio de temas como el acceso a los servicios y al abasto.

Después de siete años de trámites burocráticos, de resultados contradictorios, el tribunal de Veracruz dio la razón a los campesinos de "Antorcha Campesina" (*El Dictamen* 19-06-90) en su petición de expropiación de 100 hectáreas en San Rafael (*Diario de Xalapa* 4-05-90).

Los ganaderos organizaron la contraofensiva, con el apoyo activo de las Uniones Regionales del centro y del norte del estado. La asamblea anual de la Confederación Nacional Ganadera, celebrada el 21 de mayo de 1990 en Veracruz en presencia del Secretario de Agricultura, ofrece una tribuna excepcional para exponer sus quejas. Emplean asimismo otros canales, como la Asociación Local de Productores Plataneros del estado de Veracruz, que publica una página entera en la prensa "en apoyo público a las justas reivindicaciones de los pequeños propietarios de Martínez de la Torre y Nautla" (los ganaderos de San Rafael) (*Diario de Xalapa* 22-05-90).

Los campesinos responden con la invasión inmediata, el 23 de mayo, de 30 hectáreas de San Rafael, sin esperar los trámites oficiales de entrega de tierras. En esta ocasión las autoridades gubernamentales reaccionan en forma muy diferente a la empleada en La Soledad: no se intenta expulsión violenta alguna, y sólo se organiza a la policía para "vigilar" los lugares en litigio.

Durante este tiempo de "calma en tensión" en San Rafael, las discusiones empiezan en el Palacio de Gobierno de Jalapa. El Gobernador intenta minimizar el alcance del conflicto y evitar la derivación hacia terrenos más políticos.

En efecto, rápidamente convencidos del callejón sin salida legal del conflicto (complejidad del caso, además desfavorable para ellos), los ganaderos exigieron una solución política. El mismo día, los campesinos respondieron ocupando 10 hectáreas más en San Rafael (*Gráfico* 30-05-90). Para finales del mes de junio de 1990 el conflicto no estaba resuelto.

2 De acuerdo con la Secretaría de Reforma Agraria hubo 41 casos de invasiones de tierras en la primera mitad del año de 1990, en todo el estado (*Diario de Xalapa* 31-05-90). Según otras fuentes, desde principios de año ya se pueden contar 454 expulsiones de terrenos invadidos tanto en el medio rural como en las colonias urbanas (*El Dictamen* 20-06-90).

Hipótesis e interpretaciones: revisión de los papeles y de los poderes locales

De estos sucesos se pueden obtener algunas enseñanzas, o por lo menos plantear algunas preguntas.

¿Por qué la actitud de las autoridades gubernamentales ante estas invasiones de tierras fue tan diferente en La Soledad (intervención inmediata y brutal) y en San Rafael (negociación)?

¿Son acaso las consecuencias dramáticas de la primera intervención (varios muertos) las que llevaron a la prudencia? Es muy poco probable, pues en el momento mismo del inicio de las negociaciones en San Rafael, la policía realizaba violentas expulsiones en el sur del estado (municipio de Moloacán), en terrenos ocupados por campesinos de la Central Campesina Independiente (CCI), grupo campesino afiliado al sector oficial pero que iba perdiendo fuerza desde hacía algún tiempo (*Diario de Xalapa* 1-06-90).

En el primer caso mencionado, en La Soledad, el Estado intervino ante un socio debilitado. En efecto, el "Movimiento de los 400 Pueblos" cuenta hoy con escasa legitimidad y representatividad tras su reciente vagabundeo político, y César del Angel reúne poco a poco sus fuerzas, recurriendo a acciones llamativas para provocar la movilización. Por eso el Estado no duda en intervenir, probando así que una modernización bien entendida sólo puede realizarse en un Estado de derecho, y no tolerando las infracciones cotidianas que, en el mundo rural, representan los despojos y las invasiones de tierras.

A unos cuantos kilómetros de ahí, en San Rafael, la situación ya no es la misma. Los campesinos invasores están, si no es que protegidos, por lo menos calmadamente vigilados por las fuerzas del orden. No hay expulsión brutal, no hay violencia que deplorar hacia sus ocupantes, tan ilegales como sus colegas de La Soledad.

Es poco probable que el Estado acceda de pronto a reivindicaciones y formas de lucha que siempre ha reprobado. Las reivindicaciones de San Rafael no están en sí más o menos justificadas que otras demandas de tierras en el resto del estado. El motivo de la clemencia de las autoridades públicas no se encuentra del lado de la legitimidad de la demanda, sino más bien de la personalidad de quienes intervienen.

"Antorcha Campesina", movimiento revolucionario extremista en sus discursos, con frecuencia ha ido de la mano con el Estado en ciertas instancias oficiales, en cuanto lograba ventajas inmediatas u oportunidades de lucha contra los adversarios considerados como los más peligrosos (para ella todos los demás grupos y movimientos campesinos "competidores"). En la región de estudio, esto se traduce por conflictos y divisiones dentro del mundo cam-

pesino, con ataques repetidos contra la "Unión Campesina Independiente", movimiento de reivindicación campesina bien establecido en la Sierra de Puebla y en el centro de Veracruz desde los años setenta. Funcionando como un submarino lanzado por el Gobierno, "Antorcha Campesina" ha contribuido a intensificar las divisiones internas de los campesinos y a debilitar ciertos movimientos opositores. Sin dejar de mantener un discurso extremadamente violento y crítico con respecto al Estado, no duda en aprovechar las coyunturas y en formar alianzas "contra natura", en especial con el Estado, para introducirse fuera de sus feudos tradicionales del centro de Puebla y extender su influencia. Si se sigue esta hipótesis, el movimiento campesino "Antorcha" no es realmente un "actor social", pues no representa a ninguna fuerza organizada del mundo rural, sino sólo a una conjunción de intereses en un momento dado; conjunción de la que se aprovecha el poder instituido para combatir a sus oponentes del momento, a saber los ganaderos decepcionados por las medidas fiscales y desconfiados ante la política de modernización.

Sin embargo, los ganaderos no son abiertamente hostiles a los proyectos gubernamentales, que muchas veces apoyan en sus discursos. Aunque previamente, establecen la solución o la consideración de sus reivindicaciones, principalmente la seguridad de la tenencia de la tierra y el mejoramiento de las condiciones de comercialización. Ante esta "tibieza" de los ganaderos, se desarrolla una corriente de opinión desfavorable en las instancias estatales, quienes les acusan de incapacidad ante el cambio, de actitudes retrógradas y casi reaccionarias. El tono se endurece, y el director de Ganadería del estado de Veracruz recientemente les increpaba en estos términos: "La ganadería no es un *hobby*, es una empresa" (*Diario de Xalapa* 16-06-90). Cabe recordar que las relaciones entre el grupo de ganaderos y el Estado siempre han seguido una dinámica oscilatoria, con períodos de alianzas "indefectibles" alternándose con períodos de crisis y de enfrentamiento.³ El conflicto de San Rafael fue un tiro de

3 Para la época reciente, mencionemos el conflicto vinculado con la planta nuclear Laguna Verde, muy criticada por los ganaderos, o aquel suscitado por el arresto de ganaderos implicados en asuntos de caciquismo y de bandidaje armado (véase más arriba). En ambos casos, el enojo de los ganaderos y su oposición se desvanecieron después de difíciles negociaciones al más alto nivel y tras promesas que se les hicieron en puntos considerados fundamentales tales como la seguridad de la tenencia de la tierra.

advertencia lanzado por el Gobierno a los ganaderos, manipulando un punto muy sensible para ellos: el ataque a la propiedad. En efecto, para los ganaderos, la seguridad de la tenencia de la tierra siempre ha sido por una parte uno de los pilares y fundamentos de la producción y por otra de su influencia política local, más allá de su propia existencia como grupo social. Se puede calcular la importancia de lo que está en juego por la intensidad de la respuesta. Los ganaderos afectados directamente pusieron en marcha una serie de acciones encaminadas a ampliar el conflicto y que implicaban a ganaderos de otras regiones (llamado a las uniones vecinas y a la Confederación Nacional), así como a los "aliados" de otros sectores (la Unión de Productores de Plataneros). Sin embargo, debe recalcar que excluyeron un modo de acción que no deja de serles habitual: la violencia y la defensa armada de sus intereses recurriendo a la milicia privada.

Si hubo un cambio en la forma de reacción es porque la problemática y los actores eran otros. No se trata del problema agrario "de costumbre", del enfrentamiento entre campesinos y propietarios, sino de una negociación donde el Estado interviene detrás de los interlocutores más visibles. Los ganaderos lo comprendieron enseguida por lo que buscaron dialogar directamente con el Gobierno e imponer una solución "política" (véase más arriba). Se puede decir que se presencia una especie de lucha salvaje entre los ganaderos y el Estado y que el movimiento campesino "Antorcha Campesina" desempeña tan sólo un papel paradójicamente secundario.

El objetivo de este conflicto, en cierta forma manipulado, si no es que suscitado por el Estado, sería la negociación en torno a nuevas reglas en las relaciones políticas y productivas a nivel local. El apoyo de los ganaderos a las orientaciones modernizadoras se solicita con fuerza, pues de no ser así se reanudarían los conflictos agrarios, cuando el Estado está firmemente decidido a ignorarlos o a reprimirlos en la mayoría de las demás regiones. Los asuntos agrarios y técnicos se entrelazan y se condicionan mutuamente, en un juego mediatizado por las alianzas y las negociaciones políticas.

Prosiguiendo con la recomposición global de las reglas productivas, sociales y económicas del mundo rural, el Estado interviene directamente en aquellos sectores que controla todavía mayoritariamente, por

ejemplo en el sector petrolero o en el de la caña de azúcar. Ahí aparece como un actor y un interlocutor con todos los derechos, dotado de legitimidad y de recursos económicos y políticos, en vinculación con esta legitimidad. En cambio, entre los sectores privados como el de la ganadería, que encierra un fuerte grupo de poder de tradiciones históricas sólidamente fundamentadas, el Estado no tiene aparentemente la legitimidad suficiente para intervenir directamente, y menos aún cuando su nueva política preconiza precisamente el retiro del Estado de los asuntos productivos. En ese caso, actúa como árbitro o mediador en los conflictos locales, que sabe utilizar en la mejor forma para transmitir sus mensajes e imponer su nueva visión de la distribución de papeles: sí a la iniciativa privada, con la condición de que respete las nuevas reglas de la liberalización y sus consecuencias, en especial las fiscales. Nuevas relaciones políticas se están gestando a través de la resolución de estos conflictos locales, siendo el de San Rafael tan sólo un ejemplo.

Referencias bibliográficas

Diarios consultados

Diario de Xalapa
Gráfico
El Dictamen

Entrevistas y encuestas de campo (O. Hoffmann, D. Skerritt). Octubre-noviembre 1989.

CREDAL colectivo (O. Hoffmann, J.-Y. Marchal, M. Pépin Lehalleur, M.-F. Prévôt-Schapira) 1990 - Pistes et questions pour l'étude du pouvoir local dans le golfe du Mexique. *Documents de Recherche du CREDAL*: 217, p. 80.

Gordillo de Anda, Gustavo 1989 - *Politique macroéconomique, rôle de l'Etat et participation active de la société rurale*. Coloquio SOLOGRAL, París, junio 1990.

Rello, Fernando 1989 - *Sistemas de abasto y acceso a la alimentación (el caso de México)*. Coloquio SOLAGRAL, París, junio 1990.

Prévôt-Schapira, Marie-France 1989 - *Après les élections, la chute d'un cacique syndical. Problemas de América Latina*. La Documentation Française, París.

Skerritt, David 1980 - *Peasant Organisation in Veracruz. 1920-1980*. Copias, Oxford.